

IÑAKI
ELLAKURÍA

PABLO
PLANAS

MANUAL DE INCOMPETENCIA

(en tiempos de coronavirus)



Manual de incompetencia

en
sayos

Iñaki Ellakuría
Pablo Planas

Manual de incompetencia

(en tiempos de coronavirus)



Primera edición: septiembre de 2020

© Iñaki Ellakuría, 2020

© Pablo Planas, 2020

© de la presente edición: Editorial Funambulista, 2020
c/ Flamenco, 26 - 28231 Las Rozas (Madrid)

www.funambulista.net

IBIC: JP

ISBN: 978-84-12237-11-5

Dep. Legal: M-23807-2020

Motivo de la cubierta: *Silhouette Man*, © Editorial Funambulista, 2020

Impresión y producción gráfica: Artes Gráficas Cofás

Impreso en España

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo por escrito de los titulares del *copyright*.

Manual de incompetencia

«A veces, y estos son los momentos más asombrosos en la historia universal, el hilo de la fatalidad cae durante una fracción de segundo en unas manos por completo incompetentes. Ante el embate de la responsabilidad, que los introduce de lleno en el heroico juego de fuerzas cósmicas, tales hombres, más que afortunados se sienten estremecidos y casi siempre dejan que el destino que les ha caído encima se les escape entre las temblorosas manos»

(Momentos estelares de la humanidad, Stefan Zweig)

Capítulo 1

EL FIN DEL RELATO SANCHISTA

Acostumbrado a ejercer y entender la política como una lucha de pura supervivencia personal (son varias las ocasiones en que a punto había estado de añadir su nombre a la larga lista de aventureros de corta vida y escasos méritos), Pedro Sánchez empieza a asumir la noche del 8 de marzo, después de la multitudinaria manifestación feminista convertida en un gran acto de agitación gubernamental, y con los datos de infectados por el coronavirus aumentando de forma alarmante, que todos sus planes van a verse trastocados por un puñetazo de la realidad en forma de virus chino, miles de muertos y recesión económica. La búsqueda legislativa del bien contra el mal, de la heroica batalla del gobierno «más progresista y dialogante de la historia» contra la pérfida ultraderecha, mientras poco a poco iría asfixiando con el abrazo del oso al socio podemita haciendo suya la agenda y el argumentario populistas, se topa con un inesperado contratiempo: la obligación de gestionar la peor crisis sanitaria y económica en cien años; alrededor de cincuenta mil muertos y una caída del PIB de dos dígitos con un Ejecutivo de coalición diseñado para el choque ideológico en el Congreso y

las redes sociales pero con escasa preparación y experiencia de gestión. Una coyuntura que ofrece al secretario general del PSOE dos opciones: apartarse del libreto revolucionario del vicepresidente, Pablo Iglesias, y explorar con el Partido Popular y Ciudadanos un gran pacto que garantice la estabilidad y la convergencia con las políticas de Bruselas, tal como le reclaman Cayetana Álvarez de Toledo desde hace meses o, en los primeros días de marzo, de forma tímida, ciertamente, algunos actores económicos y el expresidente Felipe González; o bien aprovechar el estado de shock en el que se encuentra la sociedad española para encastillarse en La Moncloa, con su *Manual de Resistencia* siempre cerca, y abordar la crisis como una nueva lucha personal en su biografía política, reforzando las bases de su gobierno Frankenstein, una amalgama con partidos deseosos de desmontar «el régimen del 78».

Finalmente, Sánchez y su asesor plenipotenciario Iván Redondo optan por lo segundo. El abrazo populista, más sencillo a corto plazo pero más dañino para el país: declarar la guerra al coronavirus y a esa media España a la que quiere expulsar del debate público y la vida institucional. Con nefastos resultados para todos, al actuar tarde y mal, ofreciendo como única solución la anomalía democrática de un estado de alarma que durará tres meses y cuya principal solución es encerrar en su casa a la población. Estas páginas son el relato del reverso de la hagiografía escrita por Irene Lozano: el manual de la perfecta incompetencia sanchista en tiempos de coronavirus.

La pandemia

Alrededor de 48.000 personas han muerto en España a principios de junio de 2020 por la Covid-19, la enfermedad del coronavirus,

según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 27.000 según el Gobierno, 43.000 según el Instituto Carlos III, 44.000 según las funerarias. En todo caso y pese a la disparidad en el recuento, que retrata el caos en el que se ha movido el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, hay un dato que nadie rebate: España es de los países del mundo con más fallecidos por millón de habitantes. Esta era la cifra que arroja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), basada en la información de defunciones en los registros civiles. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en cambio, solo admite el fallecimiento de menos de 30.000 personas por la pandemia. Entre otras razones porque el Ejecutivo socialpodemita descuenta de sus cálculos a todos aquellos fallecidos a los que no se les ha podido realizar previamente una prueba aunque hubieran padecido los síntomas habituales de la enfermedad y hubieran sido tratados en consecuencia. Sánchez es incapaz de dar la cifra exacta de fallecidos, pero sí sacará pecho a finales de junio por «haber salvado» con las medidas tomadas a casi medio millón de españoles.

El descontrol es la nota dominante en la información del Gobierno, cuya punta de lanza es el médico epidemiólogo Fernando Simón, hombre elevado a los altares por la izquierda pero que comete un error mayúsculo: ejercer como político antes que científico, con sus comparencias diarias junto al ministro de Sanidad, que nada sabe de temas de salud, Salvador Illa, en las que lee el parte escrito en Moncloa sin apartarse ni un milímetro del relato gubernamental. Un defecto, cierto es, en el que caen muchos otros colegas suyos en otros gabinetes europeos.

Fichado en su día por el PP y director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Simón no parece tener nada claras las cifras de

infectados y muertos, quejándose de la información proporcionada por las Comunidades Autónomas de Madrid y de Cataluña, que incluyen también las cuentas de las funerarias. Tras dos meses de recopilación de datos, el Ministerio de Sanidad no acierta a dar con la tecla de una transmisión de cifras coherente y creíble. El desbarajuste llega hasta el punto de «resucitar» un día a dos mil fallecidos para «matar» al siguiente a casi trescientas personas. Así, el domingo 24 de mayo, y siempre según el ministerio de Sanidad, en España han muerto 28.752 personas. El lunes la cifra se rebaja a 26.834. El martes reaparecen como muertos 283 de los resucitados el día anterior, hasta completar un total 27.117 fallecidos. Un día después, Simón «canta» 27.118 muertos. Además, durante diez días, en los estertores del estado de alarma y cuando el Gobierno decide suavizar las estrictas medidas al darse cuenta del tsunami económico que se avecina, Sanidad congela la actualización de la cifra de muertos sin ofrecer una explicación clara al respecto.

Nunca nadie en España había estado tan expuesto públicamente durante un espacio tan corto de tiempo como Simón, lo cual propicia no pocos errores. Simón es capaz de decir una cosa y su contraria, a veces hasta en la misma rueda de prensa. Sin embargo, los medios de comunicación afectos al Gobierno disculpan todos sus errores. Ven en él incluso un nuevo paradigma de masculinidad —según una sesuda pieza de *eldiario.es*— e incluso un modelo de paternidad. Un varón que duda, que vacila, que se equivoca «sin problemas». Otra cosa es que un día diga que las mascarillas no sirven para mucho frente a la Covid-19, al siguiente que la mejor mascarilla es una distancia de seguridad de dos metros y, al tercero, que las mascarillas serán obligatorias en espacios abiertos y cerrados. Una ceremonia de la confusión que, para Simón, convertido en un icono pop cuyo rostro ya decora camisetas como el Che,

no tenía importancia. Tampoco para el Gobierno, que insiste en que la celebración de las manifestaciones masivas el 8 de marzo no ha tenido una incidencia reseñable en la extensión de la epidemia mientras alerta de que las pequeñas reuniones familiares pueden desencadenar una catástrofe. El desconcierto no puede ser mayor.

Así, el 27 de mayo Simón afirma: «Hay que ser conscientes de que esto no se ha terminado. Ir mejorando las restricciones no implica que el riesgo sea cero. Todavía existe la posibilidad de un brote por una pequeña fiesta inocente, que podría ser el inicio de otra onda epidémica a nivel nacional. Si no estamos todos ya en la tercera fase o en la nueva normalidad es porque debemos ir despacio. Todavía hay riesgo. Pediría por favor que entiendan que pasar de fase no es estar libres de riesgo». En cambio, dos días antes comenta ante la prensa que una manifestación como la del 8-M en Madrid, con 120.000 personas en las calles, como mucho «si tuvo algún efecto, fue marginal». Una decisión que el editor de la prestigiosa revista científica *The Lancet*, Richard Horton calificará de incomprensible desde el punto de vista médico: «Fue un grave error y una grave imprudencia permitir cualquier concentración importante de personas en ese momento (...) Los científicos tenían que saber que era muy peligroso. ¿Cómo puede un científico no alzar la voz públicamente, no criticar esa decisión y no pedirle al Gobierno que desconvoque esa manifestación? Para mí es un misterio».

Sea como fuere, nadie del Gobierno protege a Simón de tanta exposición pública, tampoco cuando se inician los trámites para su posible imputación por no haber suspendido la manifestación del 8-M, y en ningún momento él da un paso atrás. Hasta cuando se ha de recluir unos pocos días, afectado por la enfermedad, participa en las tareas de comunicación del Gobierno de manera

telemática. Sobre sus pobladas cejas Sánchez hace reposar la responsabilidad de ser la voz del Ejecutivo, y él se mantiene fiel a ese cometido. Admirado y odiado a partes iguales, se convierte en uno de los rostros de la pandemia en España, un episodio de nuestra historia que introduce en el imaginario colectivo términos y siglas como FFP2, en alusión a las mascarillas que proporcionan mayor protección, o PCR, las siglas en inglés de «Reacción en Cadena de la Polimerasa», la prueba diagnóstica que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno.

Covid-19 y SARS-CoV2 también se han convertido en términos de uso corriente, un nuevo concepto para nuestro imaginario colectivo, como lo fue a finales de los ochenta el Sida. El primero alude a la enfermedad; el segundo, al virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave que desencadena la enfermedad, llamada en un principio neumonía de Wuhan por ser esa ciudad china de once millones de habitantes el foco inicial de la pandemia, la zona cero de una hecatombe cuyas consecuencias sanitarias, sociales y económicas han cambiado de manera definitiva el mundo. Ya nada volverá a ser como antes. Los orígenes del mal no han logrado ser aclarados todavía, en una guerra de desinformación y propaganda en que el Gobierno chino sabe manejarse como nadie. Las versiones oficiales procedentes de la dictadura china sitúan el primer foco en el mercado húmedo de la citada ciudad, un lugar donde se vendían especies salvajes vivas para el consumo humano. Los primeros sospechosos son los murciélagos, que se utilizan para sopas, y el ya famoso pangolín, singular mamífero en vías de extinción cuya carne se considera una auténtica *delicatessen* en China y Vietnam y a cuyas escamas se atribuyen propiedades medicinales.

Las versiones alternativas discurren por dos líneas: la del virus que se escapó de un laboratorio y la del virus que sería, en

realidad, una bomba biológica china para convertir al país en la primera potencia mundial. La primera tesis cuenta con el supuesto aval de la existencia del Instituto de Virología de Wuhan, uno de los laboratorios más avanzados del mundo. Unas declaraciones de Luc Montagnier, Nobel de medicina en 2008 por su contribución al descubrimiento del VIH, el virus del Sida, alientan esa teoría. Según Montagnier, el SARS-CoV2 contiene secuencias iguales a las del VIH y es de fabricación humana. Los detractores de la teoría de Montagnier subrayan que el biólogo está en contra de administrar vacunas a los niños y sostiene que la homeopatía tiene una base científica, por lo que, advierten, sus opiniones deben tomarse con pinzas. La Organización Mundial de la Salud sostiene, por el contrario, que el virus no es una elaboración de laboratorio ni una manipulación a conciencia sino que tiene un origen animal. Como es obvio, la misma teoría sostiene la subdirectora del laboratorio de Wuhan y reputada científica Shi Zhengli, quien no obstante alerta en mayo de que el SARS-CoV2 «sólo es la punta del iceberg».

Según Shi Zhengli, «si queremos evitar otra catástrofe debemos adelantarnos para aprender de estos virus albergados en animales salvajes y lanzar alertas tempranas». Son unas manifestaciones a la televisión china que coinciden con el comienzo del Congreso Nacional del Pueblo y en un momento de máxima tensión entre Pekín y Washington. «Juraría por mi vida que la pandemia no tiene nada que ver con mi laboratorio», escribe también Shi Zhengli, conocida como «la mujer murciélago» por sus investigaciones con esos animales, cuando el brote ya ha contagiado a más de cinco millones y medio de personas en todo el mundo y matado a 345.000. Sin embargo, en China, oficialmente, sólo se habrían producido 82.995 contagios y 4.634 muertos.

El impacto en España, sin embargo, es gigantesco. Nuestro país encabezaba los listados de casos por número de habitantes y casi también aquellos en términos absolutos. Sólo Estados Unidos, el Reino Unido, Italia y Francia superan a España en número total de víctimas mortales según las estadísticas oficiales. Pero las sospechas sobre los datos aportados por el ministerio de Sanidad, dirigido por el socialista catalán Salvador Illa, apuntan a que España está un par de peldaños más arriba en ese siniestro podio, por delante de Francia, Italia y el Reino Unido.

El coronavirus provoca en España todas las crisis posibles, desde las inevitables, como la sanitaria o la económica, hasta las previsibles, como la política. Del empeño del Gobierno por relativizar el peligro, en primera instancia, se pasa a uno de los estados de alarma más severos del mundo. Una democracia consolidada con un Ejecutivo que reivindicaba su progresismo adopta medidas muy duras, un confinamiento total, la paralización casi absoluta de la economía, la instauración de una autoridad única y fuertes multas para quien incumpla las reglas de un estado que, más que de alarma, llegó a considerarse de excepción por muchos juristas. Se decide además recentralizar las competencias en materia sanitaria, a pesar de que algunas Comunidades van a ir por libre. Y la descoordinación es de tal calibre que mientras en unas regiones se saturan las unidades de cuidados intensivos, en otras sobran camas. Ninguna autoridad se planteará trasladar pacientes de unas regiones a otras. Demasiada burocracia y miedo a prestar lo que luego pudiera necesitarse.

El Gobierno actúa tarde y mal, aunque su maquinaria de propaganda insista en que ni se podía saber ni se podía evitar. Todos los malos indicadores españoles, ser el país con más sanitarios infectados en del mundo (52.036 según fuentes del sector), o ser de

los que mayor caída del PIB sufre, son para las huestes monclovitas y sus palmeros fruto de la casualidad, cuando no de la mala suerte. Pero el semanario británico *The Economist* desmonta con un informe la patraña: otorga la peor calificación a España en de la gestión de la crisis, seguida de Bélgica, Italia y Reino Unido.

El virus corre desbocado por muchos rincones de España, pero se ceba en las dos grandes ciudades del país, Barcelona y Madrid, más sus respectivas áreas metropolitanas. El Gobierno llega a activar al Ejército, lo que provoca las primeras fricciones con los socios independentistas catalanes y con el PNV. Será el inicio de una larga cadena de crisis en las que Pedro Sánchez muestra su cara más dura e impenetrable, ajeno a las acusaciones de autócrata por negarse a pactar con la oposición o consultar con sus aliados, cada vez más escasos conforme avanza la mancha de la enfermedad. A las pocas semanas de haber formado el primer Gobierno de coalición de la historia de España, y al cumplir casi dos años como presidente después de la moción de censura, Sánchez se enfrenta a una crisis inédita, una situación para la que no había guía y en la que de poco le sirve su *Manual de Resistencia*, especie de auto hagiografía, aunque escrita por Irene Lozano (quien fue recompensada primero con la nueva Marca España y, después, con la secretaría de Estado del Deporte) pero firmada por el hombre que quería mandar a cualquier precio.

Junto a Sánchez, comparece ante la historia de España Pablo Iglesias, un hombre que pasa de hacer escraches en las aulas universitarias al coche oficial y una mansión con piscina en Galapagar que hará proteger por decenas de Guardias Civiles. El vicepresidente sueña con la instauración del paraíso bolivariano y en su disco duro se almacenan algunas de las ideas políticas más arcaicas y desastrosas de la historia en términos económicos y de vidas

humanas. Al decir de muchos, incluso dentro del PSOE, la presencia de Podemos en el Gobierno certifica que estamos ante el peor Ejecutivo en el peor momento posible.

Ni Sánchez ni Iglesias, motejado durante la crisis como «vicepandemias», se caracterizan por su flexibilidad, pero la gestión del coronavirus les vuelve aún más berroqueños y menos empáticos. No se fían el uno del otro, pero las críticas de la oposición, la pérdida del monopolio ideológico en las redes y las protestas en la calle contribuyen a que escenifiquen una apariencia de unidad, contraria a lo que había sido una historia de recelos y desencuentros hasta que no les quedó más remedio que pactar: Sánchez para no desperdiciar la oportunidad de ser presidente del Gobierno, e Iglesias para darle la vuelta a la irrelevancia de sus 35 diputados, cuarta fuerza política muy por debajo de los 52 diputados de Vox, tercer partido en la Cámara baja.

El coronavirus pone a prueba la capacidad de gobierno de ambos, y no salen muy bien parados. Los registros de España en términos sanitarios y económicos no son precisamente para sacar pecho, a pesar de la propaganda gubernamental, y el desgaste institucional es mayúsculo. Las purgas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Guardia Civil, las órdenes para monitorizar las opiniones e informaciones críticas con el Gobierno, la tensión con el Poder Judicial por la investigación abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel sobre la manifestación del 8-M, el pacto del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral a cambio del apoyo del partido heredero de Batasuna a la enésima prórroga del estado de alarma, el desprecio de Iglesias a la oposición, los duros enfrentamientos verbales en las dos Cámaras, una Mesa de reconstrucción, que es el escenario de los ataques de Iglesias a la oposición —«váyanse y cierren la puerta al

salir», le dice al portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, en la primera sesión—, todo ello forma parte de un cuadro inesperado para el presidente del Gobierno cuando se instala en La Moncloa. Un político que ve truncada su hoja de ruta, basada en el choque ideológico y la guerra cultural, por un inesperado virus chino, pero que intentará aprovechar la coyuntura para reinar desde el absolutismo, recortando leyes, alargando en el tiempo la anomalía, limitando la libertad de prensa a través de la ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, cercenando derechos de los ciudadanos —con más de un millón de sanciones impuestas por las fuerzas de seguridad— y acallando a una oposición, que será tachada de desleal a la primera crítica.

Cronología del despropósito

Con el bombardeo de comparecencias políticas y técnicas en los primeros días de la crisis, el Gobierno trata de camuflar la falta de criterio, su propia desorientación y las predicciones erróneas de los expertos. El mismo Simón niega que la epidemia sea grave en innumerables ocasiones, llevando al Gobierno de España a cometer su principal error: no tomar las medidas necesarias cuando ya se empezaban a tener datos sobre la gravedad de la enfermedad, mucho antes de la manifestación del 8-M. De hecho, el presidente Sánchez recibe desde finales de enero detallados informes acerca de la evolución de la enfermedad. Por si no fuera suficiente, el 23 de febrero Simón se vanagloria de haber conseguido «controlar hasta cierto punto el estigma dirigido a algunos grupos poblacionales concretos».

Días después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece ante los medios para tranquilizar a la población. Ya se ha detectado

el primer caso en la península y el ministro declara lo siguiente: «No hay una prohibición decretada por parte de las autoridades internacionales ni por parte de las autoridades españolas de viajar a ninguna parte. Nosotros hemos tomado las medidas que hay que tomar para garantizar que, donde son necesarias las mascarillas, y donde son necesarios los otros productos sanitarios, estos van a estar disponibles». Mientras el doctor Simón sienta cátedra en materia de control de fronteras, insiste en que España no recomienda cribados en los aeropuertos y sostiene que «estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional». «Esto es una enfermedad que es nueva —añade— y no queremos que nuevas enfermedades lleguen a nosotros, queremos que las que tenemos desaparezcan, por lo tanto hay que tener cuidado, pero eso no implica que sea una enfermedad de una gravedad excepcional».

El 28 de febrero las cosas siguen igual de tranquilas, al parecer de Simón. «El Gobierno —afirma— no se está planteando dar en un plazo determinado ninguna recomendación. Ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas».

A mayor abundamiento, el médico niega problemas de abastecimiento de material sanitario el día 5 de marzo, mientras asegura el 6 que «tomar muestras a las personas asintomáticas no tiene mucho sentido» porque «no aporta información», y un día antes de la polémica manifestación del 8-M da carta blanca a su hijo para acudir a la marcha. Su jefe político, Salvador Illa, parece más precavido, y el mismo Día de la mujer pide a las personas con síntomas que se queden en casa. A partir del 9, el Gobierno empieza a tomar conciencia de la gravedad de la situación. El 10 afloran los casos que se habían retenido el viernes y el fin de semana, prohíbe

los vuelos con origen o destino en Italia y anuncia que los partidos de fútbol deben disputarse a puerta cerrada. No llega a celebrarse esa jornada de Liga. El 11, Simón despierta al fin y augura una cuarentena de «como mínimo de entre un mes y medio y dos meses, pero quizá pudiera ser de hasta dos, tres o cuatro meses en la peor de las situaciones». El viernes 13, Sánchez anuncia el primer estado de alarma, pero no lo decreta hasta el sábado 14. Simón pierde protagonismo de manera momentánea en favor de los discursos políticos. El presidente del Gobierno ya vaticina, bíblicamente, días muy duros. Por desgracia, no se equivocaba.

La nueva normalidad

La «nueva normalidad» (*the new normal*), el concepto popularizado en 2010 por el economista estadounidense de origen egipcio Mohamed El-Erian, apareció por primera vez en un artículo de los periodistas Rich Miller y Matthew Benjamin de *Bloomberg News* en 2008. En el texto se establecía que un crecimiento económico por debajo de lo que había sido habitual hasta entonces era la nueva normalidad. El éxito del concepto fue tal que hasta el presidente de la República china, Xi Jinping, recurrió a su uso en 2012 para explicar que la economía dejaría de crecer a un ritmo de dos dígitos para situarse en incrementos anuales en torno al 7%.

De modo que los asesores de Pedro Sánchez no habían creado un neologismo cuando sugirieron al presidente el uso de la «nueva normalidad» para describir el futuro pospandémico. De hecho, la «nueva normalidad» corría de boca en boca en las cancillerías europeas para ilustrar los efectos del coronavirus en el cambio de hábitos sociales. Sin embargo, en España la «nueva normalidad»

tendría un impacto mucho más profundo. No sólo se trataba del uso de mascarillas, de la distancia física, de las restricciones en la movilidad o de las colas ante los comercios. La «nueva normalidad» tendría efectos políticos de enorme calado. De entrada, supondría la normalización de la contabilidad creativa y mendaz respecto al número de víctimas mortales del coronavirus, una manipulación de las cifras a la altura de la del Gobierno chino, operación de camuflaje para la que resultó crucial la construcción de una credibilidad en torno a la figura de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad. Bajo la cobertura del «experto», los datos de Simón eran dogma de fe, a pesar de las notorias contradicciones y descuadres entre los aportados por las regiones y el MoMo y los aceptados por el ministerio. El resultado fue que en la mayoría de las estadísticas internacionales se hacía la acotación de que los datos españoles eran, como mínimo, discutibles y controvertidos.

El discurso informativo quedaría impregnado por el estilo de Simón: pocas certezas, muchas divagaciones y afirmaciones rotundas carentes de cualquier base científica, a pesar de la sacralización del cuestionado médico como superlativo representante de la Ciencia con mayúsculas. Todas las medidas que colisionaban con el sistema de derechos y libertades de una democracia sólida y consistente quedarían justificadas por supuestos imperativos científicos que no admitían discusión alguna.

En segunda instancia, la «nueva normalidad» iba a suponer un duro golpe a la separación de poderes. Sánchez había dado señales ya antes de la epidemia de que entendía que la Fiscalía era un instrumento al servicio exclusivo del Gobierno. La instrucción judicial de la manifestación feminista del 8 de marzo daría

pie a las sospechas sobre el escaso respeto de Sánchez y sus socios de Unidas Podemos por la separación de poderes. De entrada, la instrucción del sumario de la juez Carmen Rodríguez-Medel sobre ciertos aspectos de la gestión de la crisis propició la purga del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a filtrar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, los pormenores de la investigación que estaba llevando a cabo el Instituto Armado en calidad de policía judicial. Después, los fiscales de Madrid instaron a la magistrada a archivar el caso, cosa que ocurriría finalmente. En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional revisaba la calificación del caso del exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el acérrimo enemigo del citado Pérez de los Cobos en el operativo del referéndum ilegal del 1-O, para que una hipotética condena no implicara pena de prisión, y la Fiscalía del Tribunal Supremo abría diligencias sobre las presuntas comisiones irregulares que habría cobrado el Rey emérito, Juan Carlos I, en el negocio del Ave entre Medina y La Meca, el llamado Ave del desierto.

Si la operación no estaba lo suficientemente clara, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ocuparía de echar luz con lo que pareció un desliz en el Congreso, al responder a una pregunta de ERC relativa a si el Gobierno tenía la intención de considerar «terroristas» a los independentistas detenidos con explosivos y autoproclamados «antifascistas». En ese delirante contexto, Campo habló de una crisis y de un debate «constituyentes», confiriendo sentido a las arremetidas de Podemos contra la Corona, secundadas por el silencio del PSOE. La investigación de la Fiscalía sobre los negocios de Juan Carlos I se entendía como un ataque a Felipe VI. En la «nueva normalidad» cabía pues también la República, el intento nada oculto de un cambio de régimen

en medio del shock al que estaba sometida la sociedad española a causa del coronavirus, algo que se vio reforzado con la salida vergonzante del Rey emérito de España, y su instalación en Emiratos Árabes Unidos, unos meses después en operación diseñada claramente entre la Casa del Rey y Moncloa.